

Sostenían que la "democratización" del sindicalismo le quitaría capacidad de maniobra y presión y ello aseguraría una "paz social" donde podrían acumularse capitales para el desarrollo.

La CGT se enfrentaba a una represión cada vez mayor. Aceptaba pelear o se rendía incondicionalmente. Onganía entró en "batalla". Calificó al programa de "subversivo" y el fiscal pidió una orden de detención contra los dirigentes responsables y, embargando los bienes, el Banco Central asumió el control de los fondos depositados en varias instituciones por La Fraternidad, la Unión Ferroviaria y la FOTIA.

Se produjeron cesantías masivas entre los estatales, se amenazaba con intervenir la CGT, se promulgó la ley 17.192 llamada de "defensa civil", la cual para garantizar la seguridad nacional permitía al gobierno poner bajo jurisdicción militar a civiles, incluidos, claro está, los huelguistas, quienes a partir de ese momento quedaban sujetos al fuero militar el cual consideraría desertor a quien abandonase temporalmente el trabajo en forma injustificada. Textiles, azucareros, químicos, metalúrgicos, telefónicos se quedaron sin personería gremial.

EL GOBIERNO CONTRAATAACA

Casi un millón de trabajadores, "manu militari", se quedaron legalmente, sin sindicato. Los sindicatos no recibirían a partir de aquí los aportes y sus dirigentes no podrían representar a sus compañeros. Para legalizar las sanciones el gobierno aplicó el decreto 969 que Illia había impuesto para reglamentar las huelgas. Estas medidas fueron consecuencia del paro del 1° de marzo. Las sanciones a los empleados públicos se incrementaron (cesantías en Luz y Fuerza, telefónicos, A y EE...). Ante la furiosa embestida del gobierno el CCC decidió levantar los paros del 21 y 22 de marzo. Onganía y su gente se consideraron los grandes vencedores... Demostraron que había "autoridad" y "orden". Los grandes intereses comenzaron a ver en Onganía a un instrumento valido para crecer y mantener las condiciones que ellos necesitaban.

Los dirigentes sindicales independientemente del grupo en que militaban habían comprendido que el gobierno, por un lado, se negaba a negociar y por otro, si la CGT le mostraba los dientes, reprimía sin piedad. Estaba claro entonces que era preferible la intervención a rendirse. Intervenido quedaba la posibilidad de reorganizarse en la clandestinidad y reemprender el camino de la lucha, aceptar las reglas de juego del gobierno significaba simplemente convertirse en un sindicalismo manso, sin posibilidades de rebelarse y mucho menos exigir cambios. La CGT se convertiría en una simple oficina. Una reunión de los cuatro sectores más importantes -vandaristas, ortodoxos, independientes y no alineados- reunidos en el hotel de la Federación de Luz y Fuerza decidieron integrar una comisión de 8 miembros, la cual tendría entre sus funciones decidir la fecha en que debe convocarse a un nuevo congreso de la CGT y/o CCC.

A mediados de marzo, Krieger Vasena se dirigió al país y anunció una serie de medidas que le permitirán, de allí en más, concentrar la parte más importante del poder. El dólar sufrió una devaluación del 40% y se anunció que "era la última" devaluación, se disminuyeron los gravámenes a las importaciones, se liberalizó el mercado cambiario, se anunciaron drásticas medidas para reducir el gasto público. Por supuesto, quedaron suspendidos los convenios colectivos de trabajo, y se autorizó un aumento de salarios del 15% el cual permanecería congelado hasta diciembre del '68. Nuevamente estabilización vs. desarrollo. La gran prensa aplaudió las medidas. El "orden" estaba garantizado. Las libertades económicas, también. Por primera vez durante la era Onganía se logra desactivar al sector popular y controlar sus organizaciones. Había "paz social"; claro que una paz social muy particular, pero que aseguraba la confianza y el apoyo externo en el campo económico, al garantizar la reconversión de la estructura económica en favor de los grandes intereses multinacionales. Ahora volverían los créditos y las inversiones al no tener trabas ni tampoco los riesgos de la indisciplina laboral. Ya no había trabas ni condicionamientos en la acumulación de capital por parte de los oligopolios, ni del destino que se le dará a esa acumulación. Hay que convenir -y aceptar- que la economía argentina no había abandonado su forma capitalista, simplemente era una economía capitalista

capitalista en creciente crisis; estancamiento, inflación, fuga de capitales, crisis en la balanza de pagos... Los hechos demostrarían con absoluta claridad que el programa de Krieger Vasena, no fue un programa alternativo frente a la crisis, fue nada más ni nada menos que un programa destinado a beneficiar a un determinado sector dentro de la crisis. Terminada la experiencia Krieger Vasena, quedó una Argentina más débil, con menos capitales, más deudas, menos recursos y además con un gran estallido social.

Un comunicado del comandante del III Cuerpo Alejandro Lanusse a los mandos, era un claro respaldo a las últimas medidas del gobierno. Elogiaba el nuevo gabinete, y sostenía también que en la reestructuración ferroviaria le cabía al Ejército un rol fundamental. Por supuesto, aprobaba la política frente a la CGT y desparramaba elogios para el equipo económico, y terminaba el radiograma firmado por Lanusse: "si el 28 de junio de 1966 yo era optimista, hoy lo soy mucho más, pues encuentro que existen mayores y más evidentes motivos para serlo". Por su parte el comandante del arma, el general Julio Alsogaray, afirmaba, "la presencia del teniente general Onganía en el gobierno constituye para quienes lo conocemos plenamente, la más amplia garantía de que este gobierno concretará el logro de los objetivos que aquélla se ha fijado".

Lanusse ya estaba ubicado en un plano más que expectante. Atrás había quedado el 28 de setiembre de 1955 cuando, en su calidad de capitán y apoyando el intento fallido del general Benjamín Menéndez, intentó detener a camaradas suyos. Le costó la baja y cuatro años de cárcel. La caída del peronismo lo devolvió al Ejército y a la comandancia del Regimiento de Granaderos a Caballo. En función de este cargo olvidó que la función principal del cuerpo era defender al presidente de la Nación. Un golpe palaciego terminó con Lonardi.

Durante los episodios militares de 1962 y 1963 Lanusse militó en el bando azul, y en junio de 1966 es uno de los generales que más influyen para que Onganía acepte comandar el golpe. Algo era cierto, el general Lanusse se había convertido en la voz del Ejército, por encima de su comandante el general Alsogaray, e incluso de Onganía, el jefe de la revolución.

Desde su retiro forzoso de Madrid, Perón consideraba la estrategia a seguir. La designación del mayor Bernardo Alberte como su delegado personal, en lugar de Héctor Lannes, mostraba claramente cuál era la decisión de Perón: endurecimiento frente al gobierno. Es que Alberte en sus años de militar había mostrado dos características: en primer lugar, su lealtad a Perón a quien había intentado liberarlo cuando Perón fue detenido en los episodios del '45 y terminó él también en la cárcel. En segundo lugar, Alberte era un típico militar que recibía órdenes y se limitaba a cumplirlas. Con Alberte representando a Perón, no parecía probable que desde el gobierno pudiese comprometerse al nuevo delegado en cualquier maniobra política si previamente no era autorizado por su jefe. La lealtad del ex edecán de Perón era una garantía para éste.

La decisión de los cinco representantes del sector Independiente en la CGT, de renunciar a sus cargos, anticipaba la tormenta que seguramente se produciría en el congreso de la CGT.

En medio de los tironeos, Miguel Gazzera, pretendió poner un poco de calma: "estamos dispuestos a llegar a los cuerpos orgánicos de la CGT para asumir nuestra responsabilidad, tenemos que conducir la crisis y no pervertirla, si renunciáramos en estos momentos como quieren los independientes y las Organizaciones de Píe, daríamos la sensación de que estamos abandonando un barco que se hunde al grito de ¡sálvese quien pueda!".

El enfrenamiento Vandor-Alonso volvió a cobrar vigencia. Los independientes vieron en el mismo la posibilidad de convertirse en el árbitro de la situación y crearon condiciones para que el enfrentamiento creciese.

La llegada de Krieger Vasena al gobierno había endurecido la actitud del mismo frente a los sindicatos. El nuevo ministro de Economía pretendía un sindicalismo vencido y dividido, lo cual le aseguraba cierta impunidad a las medidas que estaba ya aplicando en materia económica. Entre

las nuevas medidas que se impulsaban desde el Palacio de Hacienda, estaba la modificación de la Ley de Asociaciones Profesionales. Entre las modificaciones que se pensaban estaba la eliminación de la cláusula que obligaba a las empresas a retener las cuotas sindicales. Además se terminaría con el reconocimiento de un sindicato por industria, privilegiando con ello la atomización del, hasta esos momentos, monolítico sindicalismo, sostenían los asesores del ministro Krieger Vasena. Los riesgos de la embestida sindical al plan económico quedaban neutralizados en el corto plazo. Recordemos también que la máxima autoridad en el área laboral no era el secretario de Trabajo, Rubens San Sebastián, sino que éste dependía de manera directa de Adalbert Krieger Vasena, ya que la cartera era de "Economía y Trabajo". En el fondo el equipo económico más que la congelación de los salarios, le importaba mantener congelados los convenios.

La convocatoria al congreso de la CGT, determinaría cuál sería en definitiva la política sindical frente al gobierno. No pocos dirigentes creían que debería nombrarse una nueva conducción compuesta por dirigentes de "segunda línea" porque consideraban que figuras como Vandor, Alonso, Taccone, Framini, etc. podría significar un endurecimiento y con ello más represiones del gobierno. Con una CGT sin "popes", argumentaban, podría buscarse una vía de diálogo, pero al mismo tiempo reagrupar al movimiento obrero en forma paralela porque se venían tiempos más duros aún.

El gobierno, por supuesto, continuaba con su política dura. Dio orden a las radios y canales del Estado a que no se pasase información referida a la CGT, al tiempo que lanzaba al ruedo a un grupo de periodistas cuya función era la de ridiculizar las medidas sindicales, al tiempo que reavivaban el tema del sindicalismo múltiple. Los trabajadores, como comúnmente sucede, estaban "sin voz y sin voceros".

A fines de marzo desde Economía se implementaba un nuevo punto del plan: la congelación de salarios. La decisión de ir a la huelga de los trabajadores de la construcción no provocó inquietud en el gobierno que retomaba el camino de las grandes declamaciones cargadas de frases grandilocuentes pero sin precisiones. Así debemos considerar las directivas para el planeamiento nacional. Dos planes en uno que pretendían abarcar diez años de la vida nacional.

Los componentes del equipo económico no veían con agrado las directivas, porque temían que las mismas pudiesen interferir sus planes, lo cual generó una puja en el gobierno sobre "planes y metas" que al final no se cumplirían. Sólo Krieger Vasena sabe qué quiere y cómo debe hacerse. La batalla "retóricos vs. pragmáticos" la habían ganado estos últimos antes de empezar.

Mientras en el gobierno se producían largas discusiones sobre los planes y Krieger Vasena tomaba decisiones concretas, en el peronismo comenzaban a soplar aires de reunificación. El mayor Alberte convocó a las distintas líneas sindicales y les transmitió la opinión de Perón: "unirse para enfrentar al enemigo común". Ocho sindicatos, metalúrgicos, petroleros, municipales, construcción, textiles, ATE, vestidos y sanidad, tomarían la responsabilidad de preparar las condiciones para la reunificación y al mismo tiempo concertar sobre la composición de la nueva conducción de la CGT. La vieja polémica Vandor-Alonso (o "62" contra las "Organizaciones de Pie") parecía llegar a su fin. Los roces que habían existido entre Perón y Vandor, parecían también superados.

Claro que más allá de la estrategia sindical-peronismo, el gobierno no daba espacios. El secretario de Trabajo, Rubens San Sebastián, anunció una nueva ley de Asociaciones Profesionales, "más detallada que la anterior y además se reglamentará el derecho de huelga a través de una ley". El escalonamiento continuaba, un escalonamiento que se prolongó al intervenir la Unión Ferroviaria y la disolución de las comisiones paritarias. El ministerio de Bienestar Social, por su parte, se hacía cargo de las obras sociales de los sindicatos intervenidos y/o suspendidos y amenazaba con implementar una ley que le daría el control de todas las obras sociales.

Mientras el gobierno "apretaba" las marcas sobre el sindicalismo el país iba entrando en la

Mientras se discutían las formas y los candidatos del congreso de la CGT, los dirigentes sindicales pretendieron realizar un acto para el 1° de mayo, e invitaban al mismo a dos ex presidentes particularmente cuestionados por las FF.AA.; Perón e Illia. Los dirigentes sabían que el gobierno prohibiría el acto, pero lo plantearon como una nueva demostración ante la opinión pública internacional, de que el gobierno militar les negaba a los trabajadores el derecho a recordar el Día de los Trabajadores, incluso en un local cerrado.

recesión y el desempleo, mientras caía el poder adquisitivo de los trabajadores. Las remanidas proclamas de que no se dejaría caer el nivel de vida de los argentinos no pasaban de unas simples declamaciones.

En este clima el CCC de la CGT convocó al congreso de la CGT para los últimos días de mayo.

LA CGT BUSCA REORGANIZARSE

El congreso cegetista debería decidir quién ocuparía los cargos de una conducción que ya había presentado su renuncia. Era evidente que de acuerdo con los nombres que se designaran se trazaría el nuevo rumbo de la CGT. La designación del nuevo secretario general era la clave, y la comisión que integraban ocho gremios de orientación peronista tenía en sus manos la delicada misión de sugerir el nombre. Algunos nombres aparecían como "probables", Lorenzo Pepe, Paulino Niembro, Juan José Taccone, Raimundo Ongaro, Amado Olmos, todos dirigentes de la primera línea del peronismo sindical. Por su parte, los Independientes mencionaban al ferroviario Bono, y a Tomás Uncal como sus candidatos con más posibilidades para ocupar, seguramente, la secretaría general adjunta. Como paso previo, los dirigentes sindicales estaban gestionando ante sus pares de la CIOLS que esta central internacional los apoyara ante la OIT para incluir al gobierno de Onganía en la "lista negra" de los gobiernos que violaban la convención internacional de la OIT N° 87.

Mientras se discutían las formas y los candidatos del congreso de la CGT, los dirigentes sindicales pretendieron realizar un acto para el 1° de mayo, e invitaban al mismo a dos ex presidentes particularmente cuestionados por las FF.AA.; Perón e Illia. Los dirigentes sabían que el gobierno prohibiría el acto, pero lo plantearon como una nueva demostración ante la opinión pública internacional, de que el gobierno militar les negaba a los trabajadores el derecho a recordar el Día de los Trabajadores, incluso en un local cerrado. Por supuesto que fue así y además el gobierno oficiosamente les recordó a los dirigentes sindicales que estaba vigente el decreto 969 del presidente Illia el cual, por supuesto, invalidaba la convocatoria al congreso en la forma que lo había programado la CGT.

Estas actitudes del gobierno sólo sirvieron para mejorar las relaciones entre el sindicalismo peronista y los partidos políticos lo cual significaba fortalecer el frente opositor al gobierno.

No sólo el 15 de mayo estaba en el calendario del gobierno. Se aproximaba la reunión anual de la OIT y seguramente en ella se produciría la acusación de la CGT. Había que buscar el método para impedirlo y un método podía ser, por ejemplo, el desconocimiento de las nuevas autoridades de la CGT que fueron elegidas "violando la reglamentación vigente y de un gobierno constitucional". El gobierno tenía conciencia que la sola mención en un foro internacional como la OIT de que en la Argentina había gremios intervenidos y suspendidos, que a 116.000 trabajadores (los ferroviarios) se les había rebajado la categoría por participar de la huelga, que se habían congelado los salarios unilateralmente, que se pretendía reglamentar el derecho de huelga, significaba una condena moral; lo tenía muy preocupado. El gobierno no olvidaba que en 1959 la OIT advirtió al gobierno de Frondizi sobre la movilización de los trabajadores. La preocupación se amplió, cuando tomaron conocimiento de la dura crítica que el obispo de Avellaneda, Jerónimo Podestá, les dirigió sin eufemismos: "No basta que el gobierno anuncie una revolución verdadera y afirme que ella concuerda con la doctrina de Populorum Progressio, es necesario que lo demuestre con hechos claros y evidentes, hechos que hasta ahora no se produjeron".

La oposición crecía. Ahora era un sector de la Iglesia, normalmente muy cautelosa en sus apreciaciones, la que atacaba la verborragia oficial...

Por su parte, el Partido Comunista en una asamblea que realizó en San Nicolás mostró hasta donde había diferencias en sus filas. El mensaje de su máximo jerarca, Vitorio Codovila, que proponía la creación de un frente democrático para enfrentar al gobierno no tuvo eco entre sus